

NOTIFICACIONES

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA

**AL TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS, A TRAVÉS DE SU
APODERADA [REDACTED] Y [REDACTED],
APODERADO Y OFICIAL DE INFORMACIÓN**

HAGO SABER: que en el procedimiento administrativo de apelación **NUE 229-A-2019 (CM)**, el Instituto de Acceso a la Información Pública, con fecha 7 de septiembre de 2020, ha pronunciado la resolución que literalmente **DICE:**.....

NUE 229-A-2019 (CM)

[REDACTED] contra la Dirección General de Impuestos Internos (DGII)

Resolución definitiva

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las nueve horas con treinta minutos del siete de septiembre de dos mil veinte.

El presente procedimiento de apelación ha sido promovido por [REDACTED], en adelante “el apelante”, en contra de la resolución emitida por el Oficial de Información de la **Dirección General de Impuestos Internos (DGII)**, bajo referencia UAIP/RES/MH/DGII/2016-186 de fecha trece de septiembre de dos mil diecinueve.

Descripción del caso:

I. La parte apelante presentó ante la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de la **DGII**, una solicitud en la que requirió:

“a) desglose de todas las variables incluidas en el apartado de cálculo de renta imponible del formulario de presentación de la declaración del impuesto sobre la renta; b) desglose de todas las variables incluidas en el apartado de liquidación del formulario de presentación de la declaración del impuesto sobre la renta; c) desglose de todas las variables incluidas en el apartado de deducciones personas naturales del formulario de presentación de la declaración del impuesto sobre la renta; d) desglose de todas las variables incluidas en el apartado de operaciones por rentas no gravadas o ingresos que son excluidos o que no constituyen renta del ejercicio o período de imposición del formulario de presentación de la declaración del impuesto sobre la renta.

Nota: cada registro debe corresponder a cada declaración del impuesto sobre la renta presentada por cada persona natural para el ejercicio fiscal 2018; y, se omiten de la solicitud datos personales de los contribuyentes: nombre y apellidos, número de identificación tributaria, dirección de domicilio; sin embargo, se solicita incluir la información de la variable de departamento y municipio”.

Según lo expuesto por el apelante, el oficial de información resolvió denegar el acceso a lo solicitado debido a que se catalogó como confidencial, de conformidad a los artículos 6 literal f) y 24 literal d) de la Ley de Acceso a la Información Pública; además del Art. 28 del Código Tributario. Asimismo, señaló que la información requerida no ha sido generada en los términos precisos; por lo que, debería producirse *ad hoc* y eso implicaría que se tendrían que destinar recursos humanos exclusivamente para desglosar cada una de las declaraciones presentadas por los contribuyentes. Finalmente, acotó que la situación fiscal del país en términos generales y no individualmente, debe divulgarse en interés del derecho a saber de la población y del principio de máxima publicidad de las instituciones del Estado.

En ese contexto, el apelante interpuso el recurso respectivo, en el que manifestó su inconformidad en el sentido que con la denegatoria de información, se están violentando los principios regulados por la LAIP; pues consideró que lo requerido está sujeto a publicación oficiosa de conformidad al Art. 10 numeral 23 de la LAIP. Por otro lado, afirmó que la **DGII** en procedimientos anteriores proporcionó un cuadro excel denominado “sumario de renta para el año 2018”, el cual contiene variables consideradas en su solicitud de información. Así las cosas, el recurso fue admitido por el Instituto, designando su instrucción al Comisionado **José Alirio Cornejo**, que posteriormente fue retomada por su comisionada suplente, **Cesia Yosabeth Mena Reina**.

II. Durante la etapa de instrucción, la **Dirección General de Impuestos Internos (DGII)** a través de su apoderada judicial especial, [REDACTED], rindió el informe de ley, de conformidad con el Art. 88 de la LAIP. En dicho informe el ente obligado estableció que la información petitionada constituye secreto fiscal, por tanto es confidencial. Con base a los Arts. 6 letra “f” y 24 letra “d” de la LAIP y 28 del Código Tributario; además de lo resuelto por el Instituto en los casos NUE 49-A-2014 y NUE 165-A-2014.

Asimismo, la **DGII** manifestó que no resguardan la información tal como la está solicitando el apelante; por lo que, implicaría que se elabore y genere *ad hoc*; afirmando que no es cierto que en la resolución de referencia UAIP/RES7MH-DGII-2019-0181 (la cual fue incorporada por el apelante en su apelación) se proporcionó información que contiene variables consideradas en la solicitud actual del apelante, sino que se proporcionó datos estadísticos, un total acumulado; debido a que la petición

que se realizó para este procedimiento es distinta al antecedente citado [UAIP/RES7MH-DGII-2019-0181].

Para tales efectos, ofreció la siguiente prueba documental:

- i. Resolución UAIP/RES/MH-DGII-2019-0093
- ii. Resolución UAIP/RES/MH-DGII-2019-0102.
- iii. Resolución UAIP/RES/MH-DGII-2019-0104.
- iv. Resolución UAIP/RES/MH-DGII-2019-0181.
- v. Resolución UAIP/RES/MH-DGII-2019-0192

Con dicha documentación, la **DGII** pretende probar que en casos anteriores ha resuelto de la misma forma; es decir, que se trata de información confidencial y que no se puede proporcionar. Respecto de ello, es oportuno mencionar que en la audiencia oral correspondiente se decidió sobre la admisibilidad de la prueba ofertada por las partes.

En ese contexto, se señaló las quince horas del 26 de febrero de 2020 como fecha y hora para el desarrollo de la audiencia oral; sin embargo, la misma fue suspendida puesto que la **DGII** manifestó la intención de entregar la información que está en su poder, motivo por el cual se le concedió un plazo de 5 días hábiles al apelante para que pudiese pronunciarse sobre la información recibida.

Dentro del plazo estipulado, [REDACTED] remitió correo electrónico en el que manifestó su inconformidad con la información proporcionada por la **DGII**. La inconformidad del apelante se sustenta en que el nivel de desagregación de las variables solicitadas es arbitrario, limitando así el acceso a la información pública y la utilidad de la misma. Asimismo, acotó que la forma de clasificación de la información ofrece 23 campos, mientras que la información solicitada se estima en más de 500 mil campos. Con base a lo anterior, solicitó que se señale nueva fecha y hora para la realización de la audiencia oral y se dé continuidad al procedimiento.

En esa oportunidad, se señaló nueva fecha y hora para llevar a cabo la audiencia oral, a través de la modalidad de videoconferencia¹; lo anterior, por el contexto de emergencia sanitaria causada por la pandemia por COVID-19 y, en aras proteger el derecho a la salud de las partes intervinientes en el presente procedimiento, del personal de la institución y de potenciar el derecho a la buena

¹ Un sistema interactivo de comunicación que transmita, de forma simultánea y en tiempo real, imagen, sonido y datos a distancia de una o más personas que presten declaración, ubicadas en un lugar distinto de la autoridad competente, para un procedimiento, con el fin de permitir la comparecencia de los ciudadanos a las audiencias de avenimiento u orales, que efectúa este Instituto.

administración prescrito en el artículo 16 de la Ley de Procedimientos Administrativos; todo ello, además con base al artículo 18 de la LPA que habilita el uso de las tecnologías para optimizar los derechos de la ciudadanía, lo que evita la movilidad de personas y contacto entre las mismas.

III. La audiencia oral se desarrolló con la comparecencia de ambas partes. En la etapa probatoria, el apelante ofreció el documento estadístico en formato Excel que fue proporcionado por el ente obligado con fecha veintiséis de febrero de este año, con ello pretende probar que la información solicitada sí está generada, pues para obtener la estadística incorporada se tuvo que utilizar la base de datos que está solicitando. Por su parte, la **DGII** no ratificó la prueba incorporada junto con su informe de ley, únicamente manifestó su posicionamiento respecto de la prueba presentada por el apelante. Escuchadas ambas partes, el Pleno procedió a deliberar sobre la prueba ofertada a lo largo del procedimiento; para lo cual, resolvió, respecto de lo presentado por el apelante, admitir el documento en formato Excel, por tener relación con el presente caso, de conformidad con el artículo 318 del Código Procesal Civil y Mercantil (CPCM). En lo relativo a la prueba ofertada por la **DGII** en su informe de ley, el Pleno resolvió rechazar dicha prueba debido a que no se acreditaron elementos de pertinencia y utilidad por falta de fundamento.

Análisis del caso

Para resolver la controversia se realizarán las siguientes consideraciones jurídicas del caso: (I) estudio de la prueba y argumentos vertidos en el presente procedimiento; (II) se analizará el principio de máxima publicidad y sus efectos; (III) se detallarán las disposiciones sobre la información confidencial e inexistente; y, por último, (IV) se hará el análisis del caso en concreto.

I. La prueba incorporada al presente procedimiento se reduce a la información en formato Excel que el ente obligado proporcionó al apelante en fecha veintiséis de febrero de este año. Además, se incorporará el expediente administrativo remitido por el oficial de información del ente obligado y los servicios en líneas que presta el Ministerio de Hacienda, referente al ISR², con base al principio de verdad material contemplado en el Art. 3 numeral 8 de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA); con esa información y los alegatos de ambas partes se tiene por acreditado que:

i. La **DGII** defiende que la información solicitada se encuentra protegida por el secreto fiscal y, además, no existe.

² Consultado por última vez en la fecha de emisión de la presente resolución: <https://portaldgii.mh.gob.sv/ssc/home>

ii. La información estadística no revela datos personales que violenten la información confidencial protegida por el secreto fiscal.

iii. La **DGII** no aportó prueba que permita conocer si la información solicitada no está generada.

iv. Los contribuyentes del Impuestos sobre la Renta realizan sus declaraciones no únicamente de manera física y presencial, sino que a través del formulario en línea.

II. El principio de máxima divulgación ha sido reconocido en el Sistema Interamericano como un principio rector del derecho a buscar, recibir y difundir información contenido en el artículo 13 de la Convención Americana. En este sentido, tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han establecido que el derecho de acceso a la información debe estar regido por el “principio de máxima divulgación”³. Asimismo, el numeral 1 de la resolución CJI/RES.147 (LXXIII-O/08) (“Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información”) del Comité Jurídico Interamericano ha establecido que, “[t]oda información es accesible en principio. El acceso a la información es un derecho humano fundamental que establece que toda persona puede acceder a la información en posesión de órganos públicos, sujeto solo a un régimen limitado de excepciones”⁴.

El Art. 4 letra “a” de la LAIP establece el principio de máxima publicidad como rector del acceso a la información pública, el cual demanda que la información en poder de los entes obligados es pública y accesible y sometida a un régimen limitado de excepciones. En ese orden de ideas, para garantizar dicho principio y el de disponibilidad, la LAIP configuró un procedimiento sencillo y expedito que facilite el acceso de la información pública a toda persona.

Asimismo, la Corte IDH se ha manifestado sobre el principio de máxima publicidad, en el sentido que: “en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, de manera que toda la información en poder del Estado se presuma pública y accesible, sometida a un régimen limitado de excepciones”⁵.

³ Corte I.D.H., *Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile*. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, párr. 93; Corte I.D.H., *Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil*. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219. Párr. 230.

⁴ CJI/RES. 147 (LXXIII-O/08), *Principios sobre el derecho de acceso a la información*, 7 de agosto de 2008. Punto resolutivo 7. Disponible en: http://www.oas.org/cji/CJI-RES_147_LXXIII-O-08.p

⁵ CIDH- *Caso Gomes Lund y otros Vs. Brasil*. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C, N° 219, párrafo 230.

También, se puede interpretar que los tres efectos del principio de máxima publicidad frente a la información que produzca, administra o se encuentra en poder de los entes obligados⁶, son los siguientes a) el derecho de acceso es la regla y el secreto es la excepción⁷; b) la carga probatoria para justificar cualquier negativa de acceso a la información debe recaer al órgano que fue solicitada⁸; y, c) preeminencia del derecho de acceso a la información en caso de conflictos de normas o faltas de regulación⁹.

En relación a las limitaciones al DAIP se ha pronunciado la “Declaración Conjunta de 2004, de los relatores para la libertad de expresión”, la cual expresa una formulación sintética de los requisitos que deben cumplir las limitaciones al derecho de acceso a la información, y que al respecto señala: “el derecho de acceso a la información deberá estar sujeto a un sistema restringido de excepciones cuidadosamente adaptado para proteger los intereses públicos y privados preponderantes, incluida la privacidad” que, **“las excepciones se aplicarán solamente cuando exista el riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos y cuando ese daño sea mayor que el interés público en general de tener acceso a la información”** y que, “la autoridad pública que procure denegar el acceso debe demostrar que la información está amparada por el sistema de excepciones”¹⁰.

III. Para el caso en comento, el ente obligado sostuvo su postura en tanto considera que la información objeto de controversia se encuentra protegida por el secreto fiscal y, por tanto, es confidencial, de conformidad a los artículos 6 letra “f” y 24 letra “d” de la LAIP y 28 del Código Tributario (CT); y, al mismo tiempo, que esa información no ha sido generada, es decir, que es inexistente a la luz de la LAIP.

Para ello, es importante describir lo que la norma contempla para ambos tipos de información:

A. El Art. 6 letra “f” de la LAIP, define la información confidencial como aquella información privada en poder del Estado cuyo acceso público se prohíbe por mandato constitucional o legal en razón de un interés jurídicamente protegido. De igual forma, el Art. 24 letra “d” de la misma ley,

⁶ El Art. 7 de la LAIP, contiene quiénes son los entes obligados a la mencionada ley.

⁷ Relatoria especial para la libertad de expresión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “El Derecho de Acceso a la Información en el marco jurídico interamericano, segunda edición. 2012.

⁸ Idem

⁹ Idem

¹⁰ Declaración Conjunta del Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, el Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), y el Relator Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión (2004). Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/documentos_basicos/declaraciones.asp

señala que es información confidencial: “d”. Los secretos profesional, comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro considerado como tal por una disposición legal”.

En complemento de lo anterior, el ente obligado fundamenta su denegatoria en lo dispuesto en el Art. 28 del CT, a saber:

“Reserva de la Información – Artículo 28 – La información respecto de las bases gravables y la determinación de los impuestos que figuren en las declaraciones tributarias y en los demás documentos en poder de la Administración Tributaria, tendrá el carácter de información reservada. Por consiguiente, los empleados y funcionarios que por razón del ejercicio de sus cargos tengan conocimiento de la misma, sólo podrán utilizarla para el control, recaudación, determinación, emisión de traslados, devolución y administración de los tributos, y para efectos de informaciones estadísticas impersonales, sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.

No obstante lo anterior, la Administración Tributaria podrá proporcionar a las instituciones que desempeñen funciones que constituyan un servicio público, el número de identificación tributaria de sus administrados, que le requieran en cumplimiento de sus atribuciones. La restricción contenida en esta disposición legal no inhibe a la Administración Tributaria de publicar los nombres de contribuyentes deudores, de conformidad a lo establecido en el artículo 277 de este Código.

Aquellas personas o entidades que, sin pertenecer a la Administración Tributaria, en cumplimiento de disposiciones especiales tuvieren acceso a los datos o informaciones a que se hace referencia, deberán guardar absoluta reserva y sólo podrán utilizarlos para efectos del cumplimiento de sus obligaciones. La contravención a la obligación establecida en este artículo, será sancionada de conformidad con las disposiciones legales o contractuales que resulten aplicables.

Las declaraciones tributarias sólo podrán ser examinadas por el propio sujeto pasivo, o a través de cualquier persona debidamente autorizada al efecto por aquél, en la Administración Tributaria y en las dependencias de la misma.

La reserva de información dispuesta en este artículo no le es aplicable a la Fiscalía General de la República y a los jueces, respecto de aquellos casos que estén conociendo judicialmente a quienes la Administración Tributaria deberá proporcionar la información que requieran en el cumplimiento de las atribuciones que les corresponden en la investigación de los delitos y en defensa de los intereses fiscales”. (Itálica suplida)

B. La información inexistente se constituye, básicamente, cuando esta no se encuentra en los archivos de la unidad administrativa que debería poseerla –Art. 73 de la LAIP-. No obstante, tal ausencia debe ser corroborada y comprobada por la persona que ejerce las funciones de Oficial de Información, tomando las medidas pertinentes para localizar lo solicitado; ya que la mera alegación de no localización resulta insuficiente para declarar su inexistencia.

En consecuencia, se puede afirmar que la LAIP ha contemplado mecanismos encaminados a garantizar el efectivo ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública. Sin embargo, ante situaciones que imposibiliten el acceso inmediato a lo solicitado, resultó necesario legislar sobre esos posibles escenarios, minimizando el ámbito de discrecionalidad de la administración pública en estas circunstancias.

Aunado a la definición anterior, es procedente verificar las causales que este Instituto ha establecido para la configuración de dicha figura: a) que nunca se haya generado el documento respectivo, b) que el documento se encuentre en los archivos del ente obligado pero se haya destruido por su antigüedad, fuerza mayor o caso fortuito; c) que la información haya estado en los archivos de la dependencia o entidad y la inexistencia se derive de su destrucción, en este caso deberá verificarse si esta se realizó de conformidad con las disposiciones vigentes en ese momento, o bien, si la destrucción se hizo de manera arbitraria.

IV. De las disposiciones señaladas, se advierte que la legislación en la materia concibe la información inexistente de manera excluyente a cualquier tipo de información; lo cual conlleva un elemento esencial y es que si una información no está en los archivos del ente obligado, resulta imposible clasificarla bajo cualquier tipo.

Explicado de otra manera, un ente obligado no puede catalogar la información inexistente como confidencial o reservada, pues dicho acto en sí mismo carece de sentido al pretender restringir el acceso a una documentación que no puede entregarse por el simple hecho de no estar en su poder.

En el presente caso, se advierte que la defensa del ente obligado es contradictoria puesto que cataloga bajo el secreto fiscal (confidencial) una información que a la vez afirma que no han generado; lo cual, como ya se explicó, resulta imposible. Para este punto, es importante mencionar que, como se comprobó con la prueba incorporada y los alegatos del apelante, la solicitud de información no comprende información relativa a datos personales; por lo que, esta afirmación del ente obligado no es válida para sustentar la restricción al acceso a la información, pues no es a este tipo de dato que se pretende acceder.

Por otro lado, es importante hacer ver que el Art. 110 de la LAIP regula el régimen de excepción a la aplicación de esa ley, es decir, nombra de forma taxativa, una serie de disposiciones que no se ven derogadas con la entrada en vigencia de la LAIP; sin embargo, no se relaciona el Art. 28 del Código Tributario; por lo que, se debe realizar un análisis de compatibilidad con el fin de contar con una interpretación armónica de las normas o comprobar la derogación tácita y aplicar el supuesto de la confidencialidad del Art. 24 de la LAIP.

No obstante, con la entrega de la información estadística al apelante (misma que fue incorporada como prueba) se robustece la afirmación de que es posible otorgar datos estadísticos sin violentar el secreto fiscal; por ello, está claro que en el presente caso no existe una disputa entre información confidencial y pública.

Ahora bien, respecto de lo alegado por el ente obligado sobre la inexistencia de la información, es preciso recordar lo ya relacionado en el segundo epígrafe de la presente resolución respecto a la carga de la prueba. La **DGII** no presentó prueba que permitiera crear certeza de que ese tipo de información no ha sido generada, tomando en cuenta que la declaración del ISR es en línea y, por tanto, de alguna manera el ente obligado recaba la información del formulario; por lo cual, resulta inconcebible que lo solicitado no esté resguardados en los archivos (digitales) del ente, aunado a ello, la defensa de la **DGII** no comprobó que en efecto, no existan los datos en la Dirección.

Es importante enfatizar que no es ánimo de este Instituto obstaculizar la labor de los entes obligados; sin embargo, la restricción del acceso a información pública no puede basarse en un argumento de ese tipo sin demostrar efectivamente lo que se está alegando. El acceso a la información pública no radica en crear o generar datos *ad hoc*; por el contrario, la entrega debe trascender a un formato abierto que permita a la ciudadanía generar sus propios análisis a través del tratamiento de esa información. Eso implica que los entes obligados deben fundamentar los motivos por los cuales no pueden permitir que la persona acceda a una información que está siendo resguardada por ellos, mas no son propietarios de la misma.

Además, es importante aclarar que el ejercicio del DAIP no constituye un obstáculo a las labores del ente obligado, pues garantizar ese derecho no es una competencia “paralela” a las funciones que desempeñan las administraciones públicas. El obstáculo, en muchas ocasiones, viene dado por los mismos entes obligados que no buscan mecanismos de organizar, resguardar o generar la información de manera tal que facilite su entrega ante una posible solicitud. Por ello, en caso de que efectivamente, los entes obligados no generen la información bajo los parámetros solicitados, es

también obligación de la entidad comprobar dicha situación o hacer el esfuerzo necesario de ilustrar a este ente decisor sobre la inexistencia de la información, tomando en cuenta las causales para ello.

Es así que, en aras de respetar a las personas, no como administradas sino como sujetas de derechos frente a la actividad estatal, se debe dar una fundamentación racional del motivo por el cual no será posible entregar cierta información.

Para el presente caso, el ente obligado no ha fundamentado ni probado que exista una causa justificada que conlleve a denegar el acceso a lo solicitado. Por lo anterior, es dable ordenar la entrega de la información estadística solicitada, omitiendo los datos personales, tal como se estableció en la solicitud del apelante.

Decisión del caso:

Por tanto, de conformidad con las razones antes expuestas y disposiciones legales citadas, y los Arts. 2, 6, 85 y 86 de la Cn; 52 Inc. 3°, 58 letra “d”, 94, 96 letra “d” y 102 LAIP y 79 y 80 del RELAIP, a nombre de la República de El Salvador, este Instituto **resuelve:**

a) Revocar la resolución emitida por el Oficial de Información de la **Dirección General de Impuestos Internos (DGII)**, bajo referencia UAIP/RES/MH/DGII/2016-186 de fecha trece de septiembre de dos mil diecinueve.

b) Ordenar al **titular** de la **DGII** que, dentro del plazo de **diez días hábiles** contados a partir del día siguiente a la notificación de esta resolución, proporcione a través de su oficial de información pública a [REDACTED], versión pública de: “a) desglose de todas las variables incluidas en el apartado de cálculo de renta imponible del formulario de presentación de la declaración del impuesto sobre la renta; b) desglose de todas las variables incluidas en el apartado de liquidación del formulario de presentación de la declaración del impuesto sobre la renta; c) desglose de todas las variables incluidas en el apartado de deducciones personas naturales del formulario de presentación de la declaración del impuesto sobre la renta; d) desglose de todas las variables incluidas en el apartado de operaciones por rentas no gravadas o ingresos que son excluidos o que no constituyen renta del ejercicio o período de imposición del formulario de presentación de la declaración del impuesto sobre la renta. Cada registro debe corresponder a cada declaración del impuesto sobre la renta presentada por cada persona natural para el ejercicio fiscal 2018; y, se omiten de la solicitud datos personales de los contribuyentes: nombre y apellidos, número de identificación tributaria,

dirección de domicilio; sin embargo, se solicita incluir la información de la variable de departamento y municipio”.

c) Ordenar al titular de la **Dirección General de Impuestos Internos** que, dentro de las veinticuatro horas posteriores al vencimiento del plazo anterior, remita a este Instituto un informe de cumplimiento de la obligación contenida en la letra b) de esta parte resolutive, el cual incluya un Acta en la que conste la documentación entregada al apelante, así como su recepción, bajo pena de iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio. Este informe puede ser remitido vía electrónica a la dirección: **oficialreceptor@iaip.gob.sv**.

d) Hacer saber a las partes que contra este acto administrativo no cabe recurso en esta sede administrativa, dejando expedito el derecho de acudir a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, si así se considerase necesario.

e) Remitir el presente expediente a la **Unidad de Cumplimiento** de este Instituto para verificar la ejecución de esta resolución.

f) Publíquese esta resolución oportunamente.

Notifíquese.-

Y.CORTEZ-----A.GREGORI-----C.L.E-----
-PRONUNCIADO POR LAS COMISIONADAS Y EL COMISIONADO QUE LA
SUSCRIBEN”RUBRICADAS”